RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO



ESTADO ELECTRÓNICO 002

La Sala Penal del Tribunal Superior de Antioquia en cumplimiento al inciso 3° del parágrafo 1 del artículo 13 del acuerdo PCSJA20-11546 del 25/04/2020 y sus prorrogas expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, fija el presente estado electrónico.

Radicado Interno	Tipo de Proceso	ACCIONANTE/SOLICITANTE DELITO	ACCIONADO / ACUSADO	Decisión	Fecha de decisión
2022-1910-1	Auto ley 906	HOMICIDIO AGRAVADO Y O	INFRACTOR:R.M.V.	Fija fecha de publicidad de providencia	Enero 11 de 2023
2022-1833-1	Tutela 1º instancia	SAULO FRANCO	JUZGADO 1° DE E.P.M.S. DE ANTIOQUIA Y OTROS	Concede recurso de apelación	Enero 11 de 2023
2022-1788-5	Auto ley 906	LUIS IRLANDO MARÍN ALZATE	JUZGADO 1° PENAL DEL CIRCUITO DE ANDES ANTIOQUIA Y OTRO	Concede recurso de apelación	Enero 11 de 2023
2022-1813-6	Tutela 2° instancia	MARIA BELEN CHALA VARGAS	UNIDAD DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN A LAS VICTIMAS	Confirma fallo de 1° instancia	Enero 11 de 2023

FIJADO, HOY 12 DE ENERO DE 2023, A LAS 08:00 HORAS

ALEXIS TOBON NARANJO SECRETARIO

DESFIJADO EN LA MISMA FECHA A LAS 17:00 HORAS

ALEXIS TOBON NARANJO
SECRETARIO

TRIBUNAL SUPERIOR DE ANTIOQUIA SALA DE DECISIÓN DE ASUNTOS PENALES PARA ADOLESCENTES

Medellín, once (11) de enero de dos mil veintitrés (2023)

AUTO DE SUSTANCIACIÓN: FIJA FECHA AUDIENCIA

PROCESO: 05 001 60 99155 2019 80035 (2022 1910)

DELITOS: HOMICIDIO AGRAVADO

SECUESTRO AGRAVADO

INFRACTOR: R.M.V.

PROVIDENCIA: SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

De conformidad con el inciso 3° del artículo 179 de la ley 906 de 2004, modificado por el artículo 91 de la ley 1395 de 2010, atendiendo la disponibilidad de la Sala de Audiencias de la Corporación, fijase como fecha para la realización de la diligencia de lectura de la decisión, para el VIERNES VEINTE (20) DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS (2023), A LAS 10:00 A.M.

Es de anotar que conforme con lo autorizado por el artículo Tercero del ACUERDO PCSJA22-11972 del 30 de junio de 2022, emitido por el

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, la audiencia se realizará mediante el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, motivo por el cual, a través de la Secretaría de la Sala, se enviará a las partes oportunamente el link para la correspondiente conexión.

Por la Secretaría de la Sala entérese de manera oportuna a todas las partes e intervinientes.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

EDILBERTO ANTONIO ARENAS CORREA

Magistrado ¹

¹ Puede validar la autenticidad del documento firmado electrónicamente ingresando en la dirección: https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/firmaelectronica

Firmado Por: Edilberto Antonio Arenas Correa Magistrado Sala 001 Penal

Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,

conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **7fdd6abcc025f1c66d9a0a198951911efbc3fabf9e29209e77f34e7738c9424c**Documento generado en 11/01/2023 11:55:01 AM

Radicado Interno: 2022-1833-1 ACCIONANTE: SAULO FRANCO

ACCIONADO: JUZGADO 1º DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE

ANTIOQUIA Y OTROS

CONSTANCIA SECRETARIAL: Para los fines correspondientes, pongo en conocimiento del H. Magistrado EDILBERTO ANTONIO ARENAS CORREA expediente digital de la acción constitucional de primera instancia, dentro de la cual el accionante interpone oportunamente recurso de apelación frente al fallo de primera instancia¹

Es de anotar que el trámite de notificación culminó el pasado 07 de diciembre, fecha en la que cual hubo de tenerse notificado conforme a lo establecido en el inciso 3 del artículo 8° de la ley 2213 de 2022 al accionado Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de EPMS de Antioquia a quien se le remitió vía correo electrónico la respectiva notificación del fallo de tutela, sin que acusare recibido del mismo².

Así las cosas, se computaron los términos para impugnar la decisión desde el siguiente día hábil a la última notificación, es decir los términos transitaron desde las ocho de la mañana (08:00 a.m.) del día nueve (09) de diciembre de 2022 hasta las cinco de la tarde (05.00 p.m.) del día trece (13) de diciembre de 2022.

Medellín, diciembre diecinueve (19) de 2022.

ALEXIS TOBÓN NARANJO Secretario

¹ Archivo 22-23

² Archivo 21

REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JURISDICCIONAL DEL PODER PÚBLICO



TRIBUNAL SUPERIOR DE ANTIOQUIA SALA PENAL

Medellín, enero once (11) de dos mil veintitrés

Para que sea desatado ante la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, se concede el recurso de apelación interpuesto de forma oportuna por el accionante **SAULO FRANCO**, contra la sentencia de tutela de primera instancia, proferida en esta Corporación con ponencia del suscrito Magistrado.

Remítase el expediente para tal fin.

CÚMPLASE

EDILBERTO ANTONIO ARENAS CORREA MAGISTRADO

Firmado Por: Edilberto Antonio Arenas Correa Magistrado Sala 001 Penal

Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **125212bbdd3775220d70e9c859974a06c3946adc4be7775534ebcbc4f4172b5b**Documento generado en 11/01/2023 04:35:16 PM

Radicado Interno: 2022-1788-5

Accionante: Luis Irlando Marín Álzate

Accionado: Juzgado Primero Penal del Circuito de Andes Antioquia y otros

CONSTANCIA SECRETARIAL: Para los fines correspondientes, pongo en conocimiento del H. Magistrado RENÉ MOLINA CÁRDENAS expediente digital de la acción constitucional de primera instancia, dentro de la cual el accionante interpone oportunamente recurso de apelación frente al fallo de primera instancia.

Es de anotar que el trámite de notificación culminó el pasado 05 de diciembre; así las cosas, se computaron los términos para impugnar la decisión desde el siguiente día hábil, es decir los términos transitaron desde las ocho de la mañana (08:00 a.m.) del día 06 de diciembre de 2022 hasta las cinco de la tarde (05.00 p.m.) del día 09 de diciembre de 2022.

Medellín, diciembre catorce (14) de 2022.

ALEXIS TOBÓN NARANJO

-

¹ Archivo 33-34

REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JURISDICCIONAL DEL PODER PÚBLICO



TRIBUNAL SUPERIOR DE ANTIOQUIA SALA PENAL

Medellín, diciembre quince (15) de dos mil veintidós

Para que sea desatado ante la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, se concede el recurso de apelación interpuesto de forma oportuna por el accionante Luis Irlando Marín Álzate, contra la sentencia de tutela de primera instancia, proferida en esta Corporación con ponencia del suscrito Magistrado.

Remítase el expediente para tal fin.

CUMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

RENÉ MOLINA CÁRDENAS MAGISTRADO

Firmado Por:

Rene Molina Cardenas Magistrado Sala 005 Penal

Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **b4c967456e51bed944e60f8e1c07aa65aaa42f074723041183be6c53f3fedd00**Documento generado en 11/01/2023 03:53:07 PM

Proceso No: 05045310400120220024900 NI: 2022-1813-6

Accionante: MARÍA BELÉN CHALA VARGAS

Accionado: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN Y

REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS

Decisión: Confirma

Aprobado Acta No.: 200 de diciembre 15 de 2022 Sala No: 6

Magistrado Ponente

Dr. GUSTAVO ADOLFO PINZÓN JÁCOME

Medellín, diciembre quince (15) del año dos mil veintidós

VISTOS

El Juzgado Primero Penal del Circuito de Apartado (Antioquia) en providencia del día 8 de noviembre de 2022, negó por improcedente el amparo de los derechos Constitucionales invocados por la señora María Belén Chala Vargas, en contra de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.

Inconforme con la determinación de primera instancia, la demandante, interpuso recurso de apelación que esta Corporación resolverá como en derecho corresponda.

LA DEMANDA

Los hechos materia de esta acción Constitucional fueron sintetizados por la Judicatura de Instancia de la siguiente manera:

Decisión: Confirma

"La señora MARÍA BELÉN CHALÁ VARGAS manifiesta que es víctima del

conflicto armado por el hecho victimizante desplazamiento forzado,

debidamente inscrita en el RUV; indica que radicó derecho de petición el día 21

de enero de 2022, solicitando priorización y/o pago de la indemnización

administrativa por el hecho victimizante de DESPLAZAMIENTO FORZADO, ya

que tiene discapacidad visual, intelectual, psicológica, múltiple; expresa que la

accionada le solicita certificado de discapacidad, por lo cual procede a enviar

el certificado a la Unidad y allí le manifestaron que le cambiarían la ruta, pero

a la fecha de presentación de la acción no ha recibido la indemnización.

Pide se tutele el derecho fundamental al mínimo vital y otros, y se ordene a la

accionada (UARIV) que de manera inmediata le entregue el dinero de la

reparación por el hecho victimizante desplazamiento forzado.

TRÁMITE Y MATERIAL PROBATORIO RECAUDADO

Admitida la acción de tutela el día 28 de octubre de 2022, se corrió traslado a

la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las

Víctimas, para que se pronunciara frente a los hechos denunciados en la

solicitud de amparo.

El representante judicial de la Unidad Administrativa Especial para la

Atención y Reparación Integral a las Víctimas, señaló que para el caso de la

señora María Belén Chala, si bien recibió derecho de petición, brindó

respuesta por medio de radicado 20227201583621 el 25 de enero de 2022, al

correo electrónico que aportado en el escrito tutelar.

Ahora, conforme a la indemnización administrativa, la unidad por medio de la

resolución N 04102019-1150833 del 22 de abril de 2021, reconoció la medida

de indemnización administrativa por el hecho victimizante de desplazamiento

forzado y aplicar el método técnico de priorización. Dicha resolución fue

notificada a la demandante personalmente el 26 de mayo de 2021, indicándole

además que contra dicha decisión procedían los recursos de reposición ante la

Página 2 de 8

Decisión: Confirma

Dirección Técnica de Reparación y en subsidio el de apelación ante la Oficina

Asesora Jurídica de la Unidad.

Conforme a la aplicación del método técnico, la accionante no acreditó una

situación de urgencia manifiesta o extrema vulnerabilidad establecidas en el

artículo 4 de la resolución 1049 de 2019 y 1 de la Resolución 582 de 2021. En

el presente caso, como la actora asevera encontrarse en una de las situaciones

de urgencia manifiesta o extrema vulnerabilidades y no había allegado la

documentación valida que lo soporte, pues los archivos que adjuntó no

cumplen los requisitos. Además, se le indicó que podrá adjuntar en cualquier

tiempo los soportes a través de los canales de atención o al correo

documentacion@unidadvictmas.gov.co

El Método Técnico de Priorización, se aplicó en el presente año 2022, por lo

cual la Unidad para las Víctimas se encuentra realizando las gestiones

correspondientes para la entrega de resultados que se harán de manera

gradual y progresiva a través de los canales autorizados teniendo en cuenta el

alto número de víctimas a las cuales se le aplicará el mismo.

Resaltó que los montos y orden de entrega de la medida de indemnización

administrativa depende de las condiciones particulares de cada víctima.

Finalmente solicitó negar las pretensiones invocadas por la accionante dado

que esa unidad ha realizado dentro del marco de sus competencias todas las

gestiones necesarias para cumplir los mandatos legales y constitucionales.

SENTENCIA IMPUGNADA

Contiene un recuento de los antecedentes que motivaron la acción

Constitucional y el trámite impartido, luego de hacer referencia al derecho de

petición, el señor juez *a-quo* analizó el caso concreto.

Reseña que la señora María Belén Chala Vargas presentó inconformidad ante

la unidad de víctimas por considerar vulnerado su derecho fundamental de

Página 3 de 8

Decisión: Confirma

petición, en el entendido de solicitar el pago de la indemnización

administrativa, la entidad accionada en la respuesta le informa a la accionante

que en el caso particular hace referencia a una situación de urgencia

manifiesta o extrema vulnerabilidad, no obstante, dicha situación debe

acreditarse por medio de certificado médico que cumpla con los requisitos

establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social.

Respecto a la recepción del certificado de discapacidad que demanda la actora,

en los anexos aportados en la tutela, no se observa ninguna constancia de

envío de dicho certificado por los canales de atención establecidos.

Considerando que en el presente caso no se configura ninguna violación de

derechos fundamentales invocados por la accionante, pues la unidad emitió

respuesta al derecho de petición, además, la actora no demostró el envío de

la documentación por los canales dispuestos por la UARIV. Por ende, negó el

amparo constitucional solicitado por la señora María Belén Chala, ante la falta

de vulneración de derechos fundamentales.

LA APELACIÓN

Inconforme con la determinación de primera instancia, la demandante,

interpone el recurso de apelación y lo sustenta en los siguientes términos:

Cuestiona que el juez de instancia omitió realizar un análisis profundo de las

pruebas documentales aportadas, asegurando que esa unidad ha incurrido en

vulneración de los derechos fundamentales reclamados por medio derecho de

petición, en el cual solicitó priorizar su indemnización administrativa,

anexando su historia clínica y demostrando su estado de salud, pues sufre de

epilepsia, y como consecuencia solicitaron un certificado de discapacidad, el

mismo que remitió por medio de correo electrónico el certificado solicitado.

Asegurando que la unidad recibió el certificado de discapacidad el 31 de mayo

de 2022, e insiste en que se le ordene a la unidad la entrega de la

indemnización administrativa de manera prioritaria.

Página 4 de 8

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Solicitud de amparo

En el caso analizado pretende la señora María Belén Chala Vargas, la protección del derecho fundamental a la vida en condiciones dignas, mínimo vital, debido proceso y en ese sentido se ordene a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas priorice la entrega de la indemnización administrativa.

2. Problema jurídico

En el caso sub examine, corresponde a la Sala determinar si es procedente por medio de la acción constitucional ordenar a la UARIV que de forma prioritaria proceda con el pago de la indemnización administrativa por hecho victimizante.

3. Del Caso en Concreto

El artículo 86 de la Constitución de 1991, propuso la acción de tutela como un instrumento de protección de los derechos fundamentales, toda vez que, ante su eventual amenaza o vulneración por las acciones u omisiones de las autoridades o particulares en los casos señalados en la ley, la persona puede acudir a instancias judiciales a fin de propender por su salvaguarda.

De esta acción se predica entonces no sólo la subsidiariedad, en virtud de la cual únicamente procede cuando quiera que el ciudadano no cuente con otros mecanismos de defensa judicial o que de existirlos no sean idóneos para evitar la configuración de un perjuicio irremediable; sino que igualmente se deben cumplir algunos requisitos para su procedencia, siendo uno de ellos y sin duda el más esencial la existencia real de la ofensa o amenaza a uno o varios derechos fundamentales que hagan necesaria la intervención del Juez

Accionante: María Belén Chala Vargas

Accionados: Unidad Administrativa para la Atención y Reparación a las Víctimas

Decisión: Confirma

constitucional en aras de su protección, pues que de lo contrario se tornaría

improcedente la solicitud de amparo.

En el caso bajo estudio la señora María Belén, protesta por la protección de

sus derechos fundamentales ante la Unidad Administrativa Especial para la

Atención y Reparación Integral a las Víctimas, pretendiendo se le pague el

dinero de la indemnización administrativa por hecho victimiznante; buscando

se priorice dado su estado de discapacidad.

Fue así entonces como la Unidad Administrativa Especial para la Atención y

Reparación Integral a las Víctimas, en réplica a lo peticionado por la

demandante, aseguró que procedió a dar respuesta mediante radicado

20227201583621 del 25 de enero de 2022. Además, que la demandante no

acreditó una situación de urgencia manifiesta o extrema vulnerabilidad de las

establecidas en el artículo 4 de la Resolución 1049 de 2019 y primero de la

Resolución 582 de 2021. Pues no ha allegado documentación valida que lo

soporte, toda vez que la documentación que anexa no cumple los requisitos

requeridos para tal fin.

Así mismo, aclaró que el Método Técnico de Priorización, se aplicó en el año

2022, encontrándose realizando las gestiones correspondientes para la

entrega de resultados de manera gradual y progresiva a través de los canales

autorizados.

Es importante destacar que no es posible a través de este mecanismo

excepcional de la acción de tutela se ordene a la unidad el desembolso del

resarcimiento o establecer una fecha para la programación del pago de la

indemnización administrativa como lo pretende la accionante víctima de

desplazamiento forzado, por tanto, esto va en contravía de los derechos de la

generalidad de las víctimas que al igual que la demandante están a la espera

del desembolso del resarcimiento.

Página 6 de 8

Por tanto, sería invadir competencias que no le corresponden al Juez

Constitucional, recuérdese que este es un mecanismo de protección de

derechos Constitucionales fundamentales de orden subsidiario y residual, no

apto para entrar a valorar nuevamente situaciones que fueron analizadas en

su momento por quien tuvo el deber de hacerlo, o saltar procedimientos

internos de la entidad encargada e idónea para el estudio de los mismos.

Visto de esta forma, es competencia de la unidad evaluar cada caso concreto,

por ende, resultaría erróneo entorpecer el trámite interno de la unidad con

una orden en tal sentido, máxime si no se avizora latente vulneración a

derechos fundamentales de la tutelante, lo que sucedería si se da una orden

al respecto, es atentar contra el derecho a la igualdad de las demás víctimas

que esperan se le otorguen la indemnización administrativa ante un escenario

de imparcialidad.

En ese orden de ideas entonces, no le queda otra alternativa a esta Sala que

CONFIRMAR el fallo de tutela de primera instancia, proferido por el Juzgado

Primero Penal del Circuito de Apartado (Antioquia) el pasado 8 de noviembre

de 2022.

En mérito de lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE

ANTIOQUIA, EN SALA DE DECISIÓN PENAL, SEDE CONSTITUCIONAL,

administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR el fallo de tutela del pasado 8 de noviembre de 2022,

proferido por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Apartado (Antioquia),

dentro de la acción de tutela interpuesta por la señora María Belén Chala

Vargas, en contra de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y

Reparación Integral a las Víctimas.

Página 7 de 8

Accionante: María Belén Chala Vargas

Accionados: Unidad Administrativa para la Atención y Reparación a las Víctimas

Decisión: Confirma

SGUNDO: La notificación de la presente providencia se realizará por parte la secretaría de esta Sala, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: Envíese a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Gustavo Adolfo Pinzón Jácome Magistrado

Edilberto Antonio Arenas CorreaMagistrado

Nancy Ávila de Miranda Magistrada

Alexis Tobón Naranjo Secretario.

Firmado Por:

Gustavo Adolfo Pinzon Jacome

Magistrado Tribunal O Consejo Seccional

Sala 007 Penal

Tribunal Superior De Antioquia - Antioquia

Nancy Avila De Miranda

Magistrado Tribunal O Consejo Seccional

Sala 003 Penal

Tribunal Superior De Antioquia - Antioquia

Edilberto Antonio Arenas Correa Magistrado Sala 001 Penal Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

 ${\tt C\'odigo\ de\ verificaci\'on:}\ a 3ff 67cbdf 2732 fe7f8d 0 e8067 fe455380377d 3ce76f245 fa08fe8ec5ff8d 479$

Documento generado en 11/01/2023 03:17:38 PM